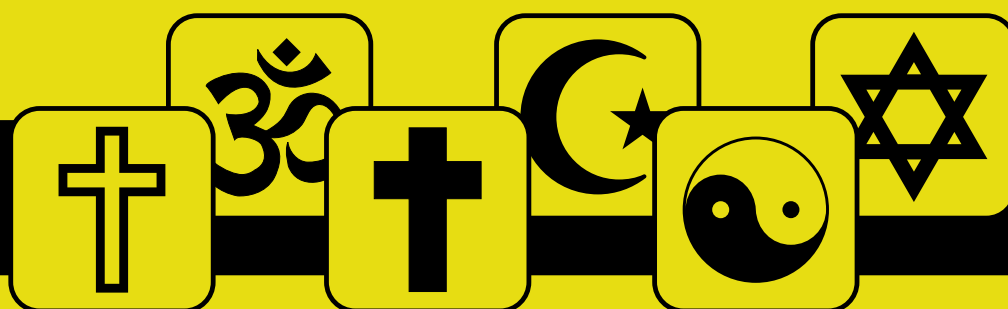


ACTUAL

55 2010



Gestión del pluralismo religioso en el ámbito autonómico y local Especial referencia a Andalucía

LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y CULTURAL, SIN ÁNIMO DE LUCRO, ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. ENTRE NUESTROS OBJETIVOS FUNDACIONALES SE ESTABLECEN EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL DE ANDALUCÍA Y LA DIFUSIÓN DE SUS RESULTADOS EN BENEFICIO DE TODA LA SOCIEDAD.

NUESTRO COMPROMISO CON EL PROGRESO DE ANDALUCÍA NOS IMPULSA A LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CON LA COMUNIDAD CIENTÍFICA E INTELLECTUAL Y CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL, Y A LA COLABORACIÓN ACTIVA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

LA COLECCIÓN ACTUALIDAD FORMA PARTE DEL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA FUNDACIÓN Y ESTÁ DESTINADA TANTO AL LECTOR ESPECIALIZADO COMO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL. CADA UNA DE SUS EDICIONES SE ESTRUCTURA COMO INFORMES MONOGRÁFICOS PARA EL FOMENTO DE LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS DE RELEVANCIA PARA LA SOCIEDAD ANDALUZA DEL SIGLO XXI.

LAS OPINIONES PUBLICADAS POR LOS AUTORES EN ESTA COLECCIÓN SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

Edita: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía.

© Del texto: sus autores.

© Noviembre 2010. Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

Bailén 50, 41001 Sevilla.

Tel.: 955 055 210. Fax: 955 055 211

www.centrodeestudiosandaluces.es

Depósito Legal: SE-1688-05

I.S.S.N.: 1699-8294

Ejemplar Gratuito. Prohibida su venta.



Gestión del pluralismo religioso en el ámbito autonómico y local

Especial referencia a Andalucía

MARÍA DEL MAR MARTÍN

Universidad de Almería

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO

Universidad de Alcalá

ISABEL CANO RUIZ

Universidad de Alcalá

PEDRO SÁNCHEZ LLAVERO

Universidad de Almería

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. El pluralismo religioso en Andalucía.....	7
3. El modelo de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas: de la Constitución a las competencias autonómicas y locales	12
4. La regulación jurídica del factor social-religioso en Andalucía	15
5. Conclusiones	19
6. Bibliografía.....	21

Resumen

La Constitución española de 1978 establece un modelo de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas basado en la libertad religiosa, la no discriminación, la laicidad y la cooperación. Los poderes públicos, por exigencia de la norma suprema, tienen la obligación de garantizar un reconocimiento pleno, real y efectivo del derecho fundamental de libertad religiosa. A tal fin, han de asumir una postura activa ante las «demandas» de los ciudadanos en materia religiosa y cooperar con las iglesias y confesiones desde una dimensión prestacional y asistencial. En el sistema constitucional español, lo religioso no queda relegado a la esfera privada e íntima de la persona, sino que tiene una dimensión pública que las diferentes administraciones deben, no sólo reconocer, sino también tutelar y promover. En las próximas páginas se da cuenta del modelo de gestión de la diversidad religiosa establecido en el ordenamiento jurídico español, con particular atención a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Introducción

En lo que llevamos de siglo XXI, hemos podido comprobar cómo la incidencia de lo religioso en las sociedades contemporáneas está cobrando una intensidad y una importancia que contradice las previsiones que, en muchos ámbitos, por muy diversas personas y en contextos muy distintos, se hicieron al respecto durante la segunda mitad del siglo XX. En efecto, con unos u otros matices, tales previsiones venían a coincidir en un paisaje bastante monocromático y con muy pocos relieves: las sociedades habrían de derivar, ineluctablemente, hacia una especie de uniforme arreligiosidad con algunos islotes de creyentes, por lo general bastantes sincréticos, que reservarían sus prácticas culturales y cualquier otra manifestación de sus creencias para el ámbito de lo privado.

La realidad, sin embargo, nuevamente, no ha querido ahormarse a las previsiones de quienes se dedican a estudiarla. El panorama que desde el punto de vista de lo religioso ofrecen las sociedades libres en la actualidad se presenta policromo y con marcadas aristas. Cualquier cosa salvo uniforme y romo.

Evidentemente, la diversidad tiene siempre aspectos positivos. En primer lugar, ante todo, porque es la más primaria manifestación de un previo ejercicio de la libertad; lo humano, en libertad, siempre tiende, en cualquier aspecto, a diversificarse. Además, supone, desde otro punto de vista, un enriquecimiento, ya que las sociedades diversas hacen que sus miembros tengan una visión más certera de la realidad humana y que asuman, como por ósmosis, valores tan importantes como el respeto al diferente.

A la vez, y sin embargo, a nadie se le escapa que el precio que supone la diversidad es que complica enormemente la manera de organizar la vida social, porque las necesidades y las exigencias son muy distintas; es mucho más sencillo gestionar una granja que un zoológico. Transportar un rebaño es bastante más fácil que llevar de una ciudad a otra a los animales de un circo.

La religión es una realidad profundamente humana. Hasta donde sabemos, ningún otro animal tiene o rechaza religión alguna. Y como todo lo humano, es una realidad paradójica: las creencias religiosas hacen que personas que por muchas otras circunstancias —raciales, culturales, posición económica, aficiones, etc.—, son muy distintas, se comporten, respecto a determinadas cuestiones, de manera idéntica y, al mismo tiempo, provoca que en personas que coinciden en todas esas variadísimas circunstancias personales, haya aspectos de sus conductas que sean absolutamente divergentes.

Esas diferentes conductas, respecto a asuntos nada secundarios, no sólo desde el punto de vista subjetivo —para el creyente, en muchos casos, nada hay más importante—, sino también desde el punto de vista objetivo, plantean en muchas ocasiones demandas y problemas a quienes se encargan de gestionar la satisfacción de las necesidades humanas en nuestras actuales y diversas sociedades.

En efecto, cuestiones tan básicas, tangibles y cotidianas como las que se refieren a la alimentación, la enseñanza o la indumentaria, pueden plantear problemas de gestión nada fáciles. Tampoco son en absoluto sencillas las cuestiones que tienen que ver con todo lo que rodea a la realidad de la muerte y el tratamiento reservado a los cuerpos sin vida o lo relacionado con la manera de practicar comunitariamente ese fenómeno —por lo demás, exclusivamente religioso— que es el culto.

La necesidad de arbitrar criterios claros, precisos, razonables y, por tanto, justos para solucionar todos —o la mayoría— de los problemas a los que puede dar lugar la coexistencia pacífica de personas con diferentes religiones, presenta una doble exigencia a los gestores de los intereses y necesidades sociales. En primer lugar, conocer bien cuáles son esas diferencias. En segundo, arbitrar las medidas oportunas para

dar la respuesta adecuada. Sólo, por ejemplo, si se sabe cuáles son las prescripciones en materia de alimentación de una determinada religión, se podrán organizar adecuadamente las pautas que han de seguirse en un concreto comedor escolar con alumnos pertenecientes a esa confesión.

Con esta publicación del Centro de Estudios Andaluces se persigue, con una finalidad eminentemente práctica, prestar una ayuda a los gestores públicos que, desde las distintas administraciones actuantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, han de trabajar en alguno de los sectores en los que incide en la actualidad la pluriforme realidad de las confesiones religiosas. Con tal objeto se aportan unos datos muy sintéticos sobre la realidad social de la diversidad religiosa andaluza; en segundo lugar, se expone el modelo constitucional entre los poderes públicos y las confesiones religiosas y, en tercer lugar, se ofrece una reseña de las principales normas en la materia con la finalidad de que pueda servir como una especie de prontuario o vademecum al que acudir en un primer momento.

Una mayor información —tanto del aspecto sociológico pero, principalmente, del normativo— se encuentra en una muy reciente publicación, propiciada por el Centro de Estudios Andaluces, que fue fruto del trabajo desarrollado en el proyecto de investigación *Gestión del pluralismo religioso en Andalucía: dimensión autonómica y dimensión local*. La publicación es la siguiente: María del Mar Martín y Miguel Rodríguez Blanco (coordinadores), *El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico. Especial referencia a Andalucía*, Editorial Comares, Granada, 2010.

En la *Jornada de Expertos sobre Religión, Derecho y Sociedad* (cuyas ponencias y la transcripción de los debates que en ella se desarrollaron se recogen, también, en la obra que se acaba de citar), que se celebró en la Universidad de Almería el 9 de abril de 2010 y donde confluyeron especialistas en Derecho Eclesiástico del Estado, con líderes locales de confesiones religiosas minoritarias, así como con gestores de distintas administraciones públicas, se puso de manifiesto cómo unas políticas públicas realistas y ejecutadas con buen sentido en los ámbitos local y autonómico constituyen una de las mejores maneras en las que confesiones y poderes públicos pueden cooperar para servir al ciudadano que, a la vez, es creyente. En concreto se constató que una de las más eficaces vías de integración de los ciudadanos no españoles que viven en nuestra nación es la que pasa a través de sus comunidades religiosas.

Otro extremo interesante que se pudo constatar fue el siguiente: los conflictos que tienen su origen en el factor o en materia religiosa, en la realidad jurídico-administrativa cotidiana, tienen poco que ver

con los que con estrépito nos trasladan esporádicamente los medios de comunicación. Los problemas que han de resolver los gestores municipales, provinciales y autonómicos son de carácter pacífico y técnico, pero, no por ello, siempre de fácil solución. A encontrar esas soluciones quiere contribuir esta pequeña publicación.

Una última precisión. En esta publicación no se hace referencia a la confesión religiosa que es, con mucha diferencia, la mayoritaria en las sociedades española y andaluza, es decir la Iglesia católica. La razón es también de orden práctico. Las diferentes administraciones públicas se han ido relacionando, desde su aparición, con las diversísimas entidades católicas —parroquias, congregaciones, religiosas, cofradías, etc.—, que son de origen más antiguo. Los gestores públicos conocen, comúnmente, no sólo de la configuración de esas entidades, sino también de las consecuencias que para un ciudadano católico comportan sus creencias y su práctica religiosa. También hay toda una tradición en las distintas praxis de las administraciones —la tributaria, la sanitaria, seguridad y previsión social, penitenciaria, etc.—, que hace que con respecto a la confesión católica, las dificultades para localizar las normas adecuadas sean, de ordinario, menores.

2. El pluralismo religioso en Andalucía

Hace un par de meses se publicó el séptimo volumen de la Fundación Pluralismo y Convivencia sobre la implantación de las minorías religiosas en las distintas comunidades autónomas españolas¹. En este caso, se trataba de realizar una «fotografía actual de la situación y origen»² de las distintas entidades religiosas minoritarias asentadas en los límites de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El volumen de R. Briones, S. Tarrés, et. al., *¿Y tú (de) quién eres? Minorías religiosas en Andalucía* (Icaria, FPC, Barcelona, 2010) supone un hito importante para el estudio del factor religioso y se convierte en un instrumento muy útil para la gestión de la diversidad religiosa por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local.

Este informe es fruto de dos años de trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Granada dirigidos por el profesor Rafael Briones. Es importante resaltar que durante esos dos años el equipo de investigación recorrió toda la Comunidad Autónoma y entrevistó a la práctica totalidad de comunidades religiosas presentes en el territorio en ese momento. El resultado es un estudio muy completo que tiene dos características especialmente reseñables. La primera es que se trata de una aproximación al fenómeno del pluralismo religioso específica del contexto andaluz. La segunda es que ofrece un análisis de cada una de las confesiones religiosas que ayuda a comprender sus procesos de implantación y desarrollos. El resultado es una foto absolutamente fiel de la realidad y, como tal, una valiosa herramienta para la prospección [...]. Sin embargo, es preciso señalar que el informe se enfrenta a un inconveniente. El propio equipo investigador es consciente de que en el momento de editar este libro ya habrán aparecido nuevas comunidades religiosas y desaparecido otras, aunque con un balance de crecimiento claramente positivo. Esto indica que estamos ante un proceso muy dinámico [...]³.

En el citado trabajo se abordan, con una gran precisión, la práctica totalidad de entidades y grupos religiosos presentes en Andalucía. Tras una breve exposición sobre sus orígenes, implantación y posterior desarrollo, se van reseñando datos tan relevantes como la descripción de sus lugares de culto o de las actividades que realizan, haciendo referencia en ocasiones al número aproximado de miembros o asistentes, así como mencionando la proporción de población inmigrante que acude a los actos de culto. Otros apartados se dedican específicamente a la dignificación de los lugares de culto y a la situación de los cementerios. Como anexo, se incluye un directorio muy completo de los lugares de culto y/o sedes de la mayoría de los grupos religiosos que operan en el ámbito andaluz. Finalmente, se concluye con un

elenco de necesidades (tanto de carácter material como inmaterial) señaladas por las comunidades religiosas, así como determinadas demandas a las administraciones públicas para una mejor gestión del pluralismo religioso.

Estamos, por tanto, ante el resultado de un enorme trabajo de campo que proporciona una variadísima cantidad de datos de tipo sociológico que serán de mucha utilidad para un gran número de expertos en esta materia, técnicos, operadores sociales, administraciones públicas, así como para cualquier persona interesada en general.

Al hacer esta breve referencia al volumen dirigido por el profesor Briones queremos dejar constancia de que nuestro trabajo *El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico. Especial referencia a Andalucía* (Comares, 2010), supone —en cierta medida— un *continuum* a la vez que una nueva aportación de índole socio-jurídica en el campo del factor religioso.

En la segunda parte de este trabajo, titulada «Aproximación sociológica a la implantación de las minorías religiosas en Andalucía», nos propusimos el objetivo de analizar la diversidad religiosa en los principales municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, se trataba de dilucidar la mayor o menor implantación de las minorías religiosas en las ciudades andaluzas, a partir de datos objetivos y actualizados, en aras de obtener conclusiones y formular propuestas jurídicas a resultados de la información recopilada.

El ámbito territorial al que se circunscribió este estudio lo constituía el conjunto de los municipios más poblados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consideramos oportuno el límite de 50.000 habitantes⁴, al entender que las localidades que superan ese índice demográfico son suficientemente significativas como para asumir el carácter de «principales municipios de Andalucía».

A la hora de determinar el número de habitantes de cada municipio, nos guiamos por los datos del padrón que, además de constituir la única fuente a partir de la que se obtienen cifras oficiales de población a nivel local, también nos permite tomar en consideración, junto a los nacionales, los extranjeros que residen en nuestras localidades⁵.

Las confesiones religiosas cuya implantación analizamos son aquellas de carácter no católico que constan inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia⁶. Optar por el criterio antedicho presenta algunas ventajas destacables.

En primer lugar, nos permite disponer de una relación fidedigna de confesiones religiosas sobre las que desarrollar nuestra investigación. Ello resulta de gran utilidad, no sólo porque suponía una fuente accesible para conocer qué confesiones tienen presencia en Andalucía, sino porque nos

1. Con anterioridad se habían editado otros informes: sobre la pluralidad religiosa en Canarias (*Religiones entre continentes*), en Cataluña (*Las otras religiones*), en la Comunidad Valenciana (*Minorías de lo mayor*), en la Comunidad de Madrid (*Arraigados*), en Castilla-La Mancha (*religion.es*) y en Aragón (*Construyendo redes*). Todos ellos auspiciados por la Fundación Pluralismo y Convivencia y editados por Icaria editorial.

2. Cfr. Briones, R., Tarrés, S. et. al., *¿Y tú (de) quién eres? Minorías religiosas en Andalucía*, Icaria, FPC, Barcelona, 2010, p. 21 (introducción institucional).

3. Briones, R., Tarrés, S. et. al., *¿Y tú (de) quién eres? Minorías religiosas en Andalucía*, op. cit., p. 22.

4. Además, el antedicho límite cuantitativo permite estudiar la implantación de las minorías religiosas en ciudades con un nivel de población muy dispar. En efecto, desde los aproximadamente 50.000 habitantes que albergan localidades como Utrera hasta los más de 700.000 que habitan en Sevilla, queda trazado un amplio espectro que nos permitirá contemplar el fenómeno del pluralismo religioso respecto a metrópolis regionales de primer orden (ciudades con un número de habitantes comprendido entre 600.000 y

1.500.000 habitantes), metrópolis regionales de segundo orden (entre 200.000 y 600.000 habitantes) y ciudades medias (entre 50.000 y 200.000 habitantes), siguiendo una habitual clasificación de la jerarquía urbana en España.

5. Los datos poblacionales que hemos empleado son los correspondientes a las cifras oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística, a fecha 1 de enero de 2009.

6. No queremos con esto indicar que sólo las entidades religiosas inscritas constituyen verdaderas confesiones religiosas (en sentido amplio), o que sólo aquellas son merecedoras de protección jurídica.

posibilitó contar con un elemento objetivo para delimitar nuestro estudio. Efectivamente, si diéramos cuenta aquí de todas las comunidades religiosas de las que hemos tenido noticia, incluidas las no inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, seguramente dejaríamos fuera a otras —pues resulta casi imposible conocer todos los grupos religiosos minoritarios—, tampoco inscritas, pero sin ningún criterio que justificase tal exclusión. Así, al disponer de un criterio lógico, jurídico e imparcial, podemos fijar el objeto de nuestro trabajo sin temor al peligro de incurrir en involuntarias «discriminaciones».

Otra razón de peso para limitar el estudio a las entidades religiosas inscritas era la conveniencia de contar con un criterio, nuevamente imparcial, que nos permitiera distinguir entre confesiones religiosas y grupos que, aun pudiendo tener una apariencia religiosa o presentar algunas similitudes con aquéllas, no merezcan el carácter de confesión religiosa. No queremos decir con esto, de ninguna manera, que los grupos no inscritos no puedan merecer el calificativo de «religiosos», sino que el tamiz que supone el Registro de Entidades Religiosas nos sirve para evitar incluir en nuestro trabajo determinados grupos que, pese a su apariencia, no tienen el carácter de confesión religiosa⁷.

Existieron algunas excepciones al referido criterio de selección de las comunidades religiosas. Tal fue el caso de la Comunidad Hindú de Málaga, asociación con sede en Benalmádena, por tratarse del único, o al menos el más representativo, grupo organizado que profesa el hinduismo tradicional en Andalucía, y por constituir el templo que aglutina a la comunidad un hito arquitectónico importante en el ámbito de la arquitectura religiosa no católica en Andalucía. Asimismo, también se han incluido algunas comunidades protestantes no inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, inclusión que consideramos justificable dada la gran cantidad y variedad de comunidades evangélicas que existen, autónomas e independientes unas de otras. La mayoría de las estudiadas están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y forman parte de la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España, pero no hicimos ninguna distinción, sino que incluimos todas las que aparecen tanto en el Directorio de Iglesias Evangélicas de Andalucía⁸ como en el Directorio del Mapa de las Minorías Religiosas⁹.

Los criterios que nos han servido de guía para el análisis de la implantación de las distintas comunidades religiosas fueron los siguientes:

1. *Número de fieles.* Mediante el sistema de tablas indicamos el número de fieles con los que cuenta cada confesión religiosa en cada uno de los municipios objeto de nuestro estudio. En ocasiones, no es posible proporcionar un número exacto de fieles, sino sólo aproximado, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que hay confesiones religiosas que no realizan «censos» de sus seguidores. En cualquier caso, la mayor dificultad en lo

que concierne a este indicador de la implantación de una confesión, es precisamente la noción de fiel que haya de emplearse, y que puede variar de una entidad religiosa a otra¹⁰.

Esta heterogeneidad en la conceptualización del fiel respecto a cada confesión religiosa, nos condujo a descartar el empleo de una pauta uniforme para cuantificar el número de fieles, pues a la postre resultaría artificial y forzada respecto a aquellas confesiones en las que ese criterio no fuera el habitual o, simplemente, no se contemplara en su régimen interno o en su propia filosofía. Ahora bien, en cada uno de los apartados dedicados a una confesión en concreto, singularmente en aquellos correspondientes a confesiones respecto de las que existe una diversidad de entidades religiosas —como el protestantismo, v.g.—, procuramos en todo momento guiarnos por un único criterio a la hora de contabilizar el número de fieles de cada una de esas entidades religiosas.

En lo que al Islam se refiere, existen también una serie de factores que dificultan la labor de estimación del número de musulmanes en cada uno de los municipios en los que se centraba el trabajo. El principal de ellos viene constituido por el hecho de que la práctica del Islam no requiere necesariamente de un lugar específico de culto, sino que es suficiente con que reúna unas condiciones determinadas de orientación e higiene. Esto significa que muchos musulmanes practican los rituales religiosos islámicos de forma individual o personal en su propio hogar o en compañía de otros musulmanes, pero sin llegar a formar comunidades ni mantener, en general, mezquitas ni lugares de culto. Asimismo, se da la circunstancia de un gran número de musulmanes que acuden a las mezquitas en las horas de la oración, especialmente los viernes o los principales días festivos que marca el calendario islámico, y que no están inscritos en el registro de la entidad. Son personas que se identifican con el Islam y, en mayor o menor medida, adoptan los principios del Islam como parte del conjunto de sus valores. Pero no queda ninguna constancia física de la pertenencia de esas personas a esa comunidad y por tanto al conjunto del colectivo islámico español. Por consiguiente, el número de musulmanes que residen en una localidad no puede cuantificarse atendiendo exclusivamente a los lugares de culto o comunidades islámicas presentes en ella. Ello ha determinado que, en muchos casos, a la hora de precisar la población musulmana de los municipios estudiados se haya seguido el criterio de la procedencia de países de mayoría islámica tales como Marruecos, Senegal, Argelia, Nigeria o Pakistán, entre otros.

2. *Lugares de culto.* Un segundo indicador es el del número de lugares de culto de cada entidad religiosa en los municipios objeto de nuestro estudio. A este respecto, en un principio consideramos oportuno partir de la noción de lugar de culto propuesta por la doctrina eclesiasticista. Así, lugar de culto sería aquel lugar público (en el sentido de estar abierto a la comunidad de

7. Por mor de la mencionada opción de guiarnos por la relación de entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, declinamos también tratar la distinción entre confesiones religiosas y sectas, con independencia de que importantes instituciones y expertos argumenten el carácter sectario de algunas de las entidades actualmente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

8. Serrano, B., *Directorio de Iglesias Evangélicas de Andalucía*, Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía, Sevilla, 2006.

9. Briones, R., Tarrés, S. et. al., *¿Y tú (de) quién eres? Minorías religiosas en Andalucía*, op. cit.

10. En muchas comunidades nos hemos encontrado con la distinción entre «asistentes» o «simpatizantes» (que no se pueden calificar como miembros) y los «miembros de pleno derecho», estatus que se alcanza mediante un acto expreso de vinculación con la comunidad. Por contra, en algunas confesiones como el budismo, no existe (o, al menos, no es necesario que se produzca) una ceremonia de iniciación. Precisamente, en el caso del budismo, la adhesión de la persona a este credo constituye un acto íntimo,

incluso puede que hasta sea secreto, y sólo conocido por parte del fiel de que se trate. No hay, pues, un censo o registro de seguidores.

fieles en general, y no sólo a una o varias personas determinadas) afectado por el órgano confesional competente a un destino cultural estable y efectivo¹¹. Sin embargo, pronto advertimos los inconvenientes de esta definición de cara a nuestro trabajo. Al fin y al cabo, la antedicha noción de lugar de culto está concebida para delimitar aquellos espacios que gozan de la tutela del Estado, en garantía de la libertad religiosa. Por ende, resulta necesario, a tal efecto, acuñar una noción de lugares de culto que delimite aquéllos que son merecedores de la protección jurídica específica que para ellos prevén la Ley y los tratados internacionales.

Sin embargo, el propósito de la investigación no se hubiera cumplido satisfactoriamente si se hubiera utilizado una noción restrictiva, en el sentido de muy estricta, de lugar de culto, pues lo que importaba era identificar y enumerar aquellos espacios que, de forma efectiva, reciben un uso cultural, aunque jurídicamente no lleguen a alcanzar el estatus de «lugar de culto». En suma, contemplamos algunos centros de culto de carácter privado (por ejemplo, reservados a una determinada familia), pues el carácter abierto o cerrado de los lugares destinados al culto no es determinante de la implantación de las confesiones religiosas. Al contrario, si no tuviéramos en cuenta los lugares de culto de carácter privado, no estaríamos reflejando fielmente la incidencia del pluralismo religioso en Andalucía.

Por ello, la noción de lugar de culto¹² que manejamos en nuestro estudio podría definirse como aquel inmueble, público o privado, cualquiera que sea el régimen de su titularidad, destinado de forma estable y efectiva a la celebración de actos de índole religiosa, especialmente cultos, oración y asistencia religiosa.

3. *Cementerios*. En tercer lugar, también tomamos como indicador de la implantación de las confesiones religiosas acatólicas, la existencia de cementerios confesionales de las mismas o, al menos, de parcelas cementeriales destinadas al enterramiento de personas de una determinada confesión en los municipios que constituyen el ámbito territorial del trabajo. Ahora bien, únicamente contemplamos aquellos cementerios —o parcelas de los mismos— en los que actualmente puedan llevarse a cabo enterramientos¹³.

Ciertamente, son muy pocas las comunidades religiosas locales que disponen de un cementerio o parcela confesional. Además, conviene resaltar que lo que constituye para algunas entidades religiosas una ferviente aspiración, para otras no está en ningún modo contemplada entre sus objetivos ni a corto ni a largo plazo. Estas divergencias obedecen, sustancialmente, a la existencia o no de ritos funerarios propios por parte de cada confesión. Así, en el caso de musulmanes o judíos, la existencia de prescripciones religiosas en la materia impulsa a las comunidades a reclamar la construcción de cementerios adaptados a sus ritos y costumbres. Por el contrario, entidades religiosas

como vida universal, al no contemplar prescripción alguna a este respecto, no sienten necesidad de contar con parcelas cementeriales propias.

4. *Mataderos*. Un último indicador que empleamos en nuestro estudio, aunque no ofrecemos aquí los datos al respecto, es el del número de mataderos en los que se realiza el sacrificio de animales según las prescripciones religiosas de determinadas confesiones. Más allá de la existencia de principios o normas religiosas sobre alimentos (prohibición de comer carne de un determinado animal, dieta vegetariana obligatoria, ayunos, v.g.), que establecen muchas confesiones, el antedicho indicador concierne, de entre las confesiones religiosas estudiadas, sólo a la judía y la musulmana, que disponen la observancia de una forma concreta de sacrificar a los animales. Por ello, sólo respecto de esas confesiones se examina este particular.

Aparte de los cuatro referidos indicadores, y en aras de no perder la perspectiva jurídica que debe guiar este estudio, a propósito de cada confesión religiosa también describimos su estructura y organización, y expusimos una serie de consideraciones socio-jurídicas al respecto. Así, concretamos si la comunidad religiosa de que se trate goza o no de personalidad jurídica; y si la tiene, de qué clase, y si se trata de una entidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, lo cual será la norma general, habida cuenta de los criterios seguidos en el trabajo para determinar las confesiones religiosas cuya implantación debíamos estudiar. Asimismo, también indicamos si la entidad religiosa en cuestión está adscrita a alguna federación (como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España o la Comisión Islámica de España).

Además, también comentamos en qué medida la organización jerárquica de la entidad religiosa de que se trate permite una fácil identificación de las personas que constituyen los interlocutores oportunos a la hora de entablar diálogo con esa entidad (singularmente, cuando el otro interlocutor es un órgano de la administración). En este sentido, y basándonos en nuestra experiencia a lo largo de la investigación, hicimos constar nuestras impresiones sobre el nivel de disponibilidad —o de opacidad— de las entidades religiosas a la hora de establecer conversaciones con ellas. Por último, también mencionamos los posibles convenios que tenga la entidad religiosa en cuestión con la administración (ya sea local o autonómica).

Desarrollamos a continuación los datos más relevantes obtenidos¹⁴:

11. Cfr. López Alarcón, M., «Régimen patrimonial de las confesiones religiosas», en VV. AA., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, EUNSA, Pamplona, 1994, p. 758. De forma similar, el art. 2.1 de cada uno de los tres Acuerdos de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España (aprobados por las leyes 24, 25 y 26/1992, respectivamente), definen lugar de culto como cada uno de los edificios o locales destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, formación (término que no aparece, empero, en

el Acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la comunidad respectiva con la conformidad de la Federación.

12. Sin embargo, y sin renunciar a la antedicha noción de lugar de culto, en algunos casos, y siempre en aras de mostrar fielmente la implantación de las diferentes confesiones religiosas en los principales municipios andaluces, hemos hecho referencia en este trabajo a locales que no pueden considerarse lugares de culto, pero que ocasionalmente pueden emplearse para las celebraciones o

reuniones religiosas. Tal es el caso de aquellas confesiones que, al no disponer de un centro de culto, se reúnen en domicilios particulares de algún miembro. Asimismo, también incluimos aquellos centros de entidades religiosas en las que no existen propiamente los cultos, sino meras reuniones u otros actos de índole religiosa que no pueden calificarse de culto u oración. En estos casos, la razón de la inclusión de esos locales es la necesidad de adaptar los criterios propuestos de forma genérica para estudiar la diversidad religiosa a aquellas confesiones (muy minoritarias con respecto a las demás que estudia este trabajo) a las que no se

Tabla 1. Fieles

Municipio	Iglesias protestantes ^a	Cristianismo ortodoxo ^b	Testigos cristianos de Jehová	Iglesia mormona ^c	Adventismo ^d	Iglesia palmariana ^e	Iglesia de Cristo	Iglesia de unificación	Iglesia nueva apostólica en España	Lectorium rosicrucianum	Iglesia de scientology ^f	Vida universal	Judaísmo	Islam ^g	Budismo ^[*]	Hinduismo	Baháismo
Sevilla	3.540	220	1.545	817	150	-	-	20	50	-	150	-	110	6.000		-	26
Málaga	2.580	145	1.052	1.095	230	-	-	5	210	29	-	13	1.200	30.000		60	33
Córdoba	1.215	15	695	174	50	-	-	-	-	1	-	-	-	3.500		-	29
Granada	1.105	-	926	427	50	-	-	-	70	8	-	-	-	15.000		-	25
Jerez de la Frontera	610	57	399	315	-	-	-	-	42	-	-	-	-	800		-	-
Almería	1.610	-	270	248	220	-	-	-	87	1	-	-	-	13.500		-	22
Huelva	1.090	35	431	158	80	-	-	-	-	3	-	-	-	5.000		-	14
Marbella	6.720	30	411	-	10	-	60	5	-	-	-	-	2.000	5.000		-	33
Cádiz	195	9	186	520	-	-	-	-	-	13	-	-	-	310		-	1
Dos Hermanas	660	-	422	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450		-	2
Jaén	630	-	295	352	150	-	-	-	-	-	-	-	-	950		-	30
Algeciras	580	-	233	142	50	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000		-	6
San Fernando	330	10	260	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200		-	7
El Puerto de Santa María	225	-	132	220	25	-	-	-	-	-	-	-	-	350		-	9
El Ejido	150	20	365	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000		-	1
Roquetas de Mar	1.150	2.020	408	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000		-	-
Chiclana de la Frontera	315	1	278	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310		-	1
Vélez-Málaga	370	-	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500		-	1
Mijas	160	90	94	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350		-	8
Fuengirola	790	45	430	151	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150		-	11
Alcalá de Guadaíra	250	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300		-	2
Sanlúcar de Barrameda	150	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150		-	-
La Línea de la Concepción	415	-	345	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	800		-	26
Torremolinos	315	30	199	-	-	-	-	20	-	-	-	-	250	2.600		-	4
Estepona	200	-	209	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500		-	8
Motril	260	115	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500		-	-
Benalmádena	135	45	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700		900 ^h	25
Utrera	140	-	92	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	235		-	-

[*] No se pueden facilitar datos sobre la membresía puesto que la adhesión de una persona al budismo no se realiza mediante una ceremonia de iniciación, ni mediante una adscripción formal (si bien es posible que se emitan «votos», lo cual se hace públicamente, mas ello no constituye un requisito necesario para ser budista). Por contra, la afección al budismo es de carácter íntimo; incluso puede ser secreto. A veces ni siquiera puede hablarse de acto privado, sino que puede consistir en un *continuum* en el ánimo de la persona, que progresivamente va asumiendo las creencias, sin que se pueda fijar un momento preciso a partir del cual se considera budista.

a. Se trata de un dato muy aproximado, pues nos ha sido imposible contactar con todas las comunidades y familias evangélicas instaladas en Andalucía. El total de evangélicos (25.890 fieles) sería sensiblemente superior a lo expresado en la tabla debido a que faltan comunidades por contabilizar (estimándose la cifra total en unos 166.888 —incluyendo practicantes, no practicantes, inmigrantes. . .—, según datos de SERRANO, B., *Directorio de Iglesias Evangélicas de Andalucía*, Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía, 2006 pp. 24 y 243). Además, existen otros municipios en Andalucía con presencia evangélica que no se han tenido en cuenta en este estudio.

b. Se ha contabilizado conjuntamente la Iglesia oriental hispana, el Arzobispado ortodoxo griego de España y Portugal (Patriarcado ecuménico de Constantinopla), la Iglesia ortodoxa rumana en España y la Iglesia ortodoxa rusa (Patriarcado de Moscú). Teniendo en cuenta que están empadronados un número mucho mayor de rumanos —que con mucha probabilidad deberían ser incluidos en la Iglesia ortodoxa rumana— de lo indicado en esta tabla en los distintos municipios estudiados, el número de miembros del

cristianismo ortodoxo ascendería considerablemente. Se utiliza este mismo criterio en las tablas restantes.

c. La denominación correcta es Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pero son conocidos comúnmente como mormones.

d. Se incluye dentro del adventismo el adventismo tradicional, el movimiento de reforma (Málaga) y la Iglesia cristiana de la promesa (Almería). Se utiliza este mismo criterio en las tablas restantes.

e. El nombre completo es Iglesia cristiana palmariana de los carmelitas de la santa faz.

f. Cuenta con una sola «misión» en Sevilla (todavía no se ha establecido Iglesia en Andalucía). A este centro acuden personas no sólo de Sevilla sino también de Málaga, Granada, Almería, Cádiz, Córdoba y Huelva, así como de la provincia sevillana (Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas).

g. En algunos municipios no se ha podido obtener respuesta de las comunidades musulmanas establecidas, por lo que la cifra expresada representa la población residente en dicha ciudad de origen marroquí, senegalés, nigeriano, argelino y paquistaní según el *Padrón Municipal de Habitantes del año 2009* elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, que, en su mayoría, son musulmanes. El número de musulmanes españoles no se ha podido cuantificar, ni tampoco, como es de esperar, los inmigrantes musulmanes que residen de forma ilegal.

h. Las cifras indicadas son las del número total de miembros de la Comunidad Hindú de Málaga. De ellos, la mayoría reside en Torremolinos. El resto se reparte entre Benalmádena, Fuengirola y Marbella.

ajustan del todo nuestros parámetros iniciales. De este modo, si una entidad religiosa carece de cultos propiamente dichos, y únicamente tiene reuniones o charlas de índole religiosa, parece conveniente hacer constar la existencia de lugares destinados específicamente a la realización de esa clase de actividades.

13. Así pues, no se incluyen los cementerios históricos encontrados en excavaciones arqueológicas (como la necrópolis musulmana de Estepona) ni los que han dejado de usarse, aunque sea en tiempos recientes (como la parcela para enterramientos judíos en el Cementerio de San Rafael de Málaga).

14. Para el análisis de datos más concretos, consultar Martín, M. y Rodríguez Blanco, M. (coords.), *El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico. Especial referencia a Andalucía*. Comares, Granada, 2010.

Tabla 2. Centros de culto

Municipio	Iglesias protestantes	Cristianismo ortodoxo	Testigos cristianos de Jehová	Iglesia mormona	Adventismo	Iglesia palmariana	Iglesia de Cristo	Iglesia de unificación ^a	Iglesia nueva apostólica en España	Lectorium rosicrucianum	Iglesia de scientology	Vida universal	Judaísmo	Islam	Budismo	Hinduismo	Baháismo
Sevilla	71	3	8	2	1	-	-	-	1	-	1 ^b	-	1	6	5	-	1
Málaga	62	3	4	3	2	-	-	-	1	1	-	1	1	4	2	2	1
Córdoba	14	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Granada	17	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-	2
Jerez de la Frontera	11	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Almería	23	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	1
Huelva	15	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Marbella	14	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	-	5
Cádiz	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dos Hermanas	10	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jaén	14	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Algeciras	20	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
San Fernando	11	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
El Puerto de Santa María	11	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
El Ejido	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Roquetas de Mar	18	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Chiclana de la Frontera	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vélez-Málaga	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Mijas	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fuengirola	18	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Alcalá de Guadaira	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sanlúcar de Barrameda	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Línea de la Concepción	10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Torremolinos	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Estepona	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Motril	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Benalmádena	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Utrera	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

a. Se reúnen en domicilios particulares.

b. No se trata exactamente de un centro de culto (iglesia) sino de una «misión», en las cuales no se realizan actividades culturales.

Tabla 3. Cementerios o parcelas cementeriales^a

Municipio	Iglesias protestantes	Cristianismo ortodoxo	Testigos cristianos de Jehová	Iglesia mormona	Adventismo	Iglesia palmariana	Iglesia de Cristo	Iglesia de unificación	Iglesia nueva apostólica en España	Lectorium rosicrucianum	Iglesia de scientology	Vida universal	Judaísmo	Islam	Budismo	Hinduismo	Baháismo
Sevilla													[c]	[c]			
Córdoba														[c]			
Granada														[c]			
Jerez de la Frontera														[c]			
Huelva	[c]																
Fuengirola														[c] ^b			
Benalmádena ^c	[p]													[c]			[p]
Utrera						[cr]											

a. Para clarificar, [p] = parcela propia; [c] = cementerio confesional; [cr] = cripta para miembros de la confesión. Sólo hemos incluido en las tablas los municipios que cuentan con un cementerio confesional o parcela habilitada propia.

b. Se trata de un cementerio privado.

c. Cementerio Internacional de Benalmádena.

3. El modelo de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas: de la Constitución a las competencias autonómicas y locales

La Constitución española de 1978 se ocupa expresamente del tema religioso en dos artículos, el 14 y el 16. El primero de ellos se refiere al principio de igualdad y no discriminación en los siguientes términos:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por su parte, el artículo 16, que consta de tres apartados, establece:

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Estos dos artículos de la Constitución, además de reconocer el derecho fundamental de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión sin discriminación alguna, recogen cuatro principios que informan toda la regulación del factor social-religioso: el principio de libertad religiosa, el principio de no discriminación, el principio de laicidad y el principio de cooperación.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, esos cuatro principios informadores tienen el siguiente contenido:

a) El principio de libertad religiosa garantiza a la persona la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, de un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso. Junto a esta dimensión interna o de autodeterminación ante lo religioso, el principio de libertad religiosa incluye también una dimensión externa que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros.

b) El principio de no discriminación supone que no es posible establecer ningún tipo de trato jurídico diverso de los ciudadanos en función de sus ideologías o creencias. Asimismo, por exigencia de este principio, ha de existir un igual disfrute de la libertad religiosa para todos los ciudadanos. Ello no significa que deba haber una uniformidad de trato legislativo para todas las manifestaciones de religiosidad. La desigualdad en la regulación de una materia no entraña necesariamente una vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley protegido por el artículo 14 de la Constitución.

Sólo vulneran la prohibición de discriminación aquellas desigualdades de trato legislativo que introduzcan diferencias entre situaciones que puedan considerarse sustancialmente iguales y sin que posean una justificación objetiva y razonable. Por lo que dicho precepto constitucional, en cuanto límite al propio legislador, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y razonable. A lo que cabe agregar que también es necesario, para que la diferencia de trato sea constitucionalmente lícita, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal diferenciación sean proporcionadas a la finalidad perseguida por el legislador, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Exigiendo el principio de igualdad, por tanto, no sólo que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida por el legislador.

c) El principio de laicidad tiene dos manifestaciones: por un lado, implica que el Estado, en atención al pluralismo de creencias existente en la sociedad española y a la garantía del derecho de libertad religiosa a todos los ciudadanos, no es confesional. La no confesionalidad del Estado prohíbe que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Por otro lado, las

confesiones religiosas no pueden trascender los fines que les son propios y ser jurídicamente equiparadas al Estado, pues la Constitución prohíbe cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. El Tribunal Constitucional ha insistido particularmente en la conexión entre el principio de laicidad y el principio de libertad religiosa. Para el Tribunal, la dimensión objetiva de la libertad religiosa exige la neutralidad de los poderes públicos ante el fenómeno religioso, ínsita en la aconfesionalidad del Estado.

Esta postura del máximo intérprete de la Constitución se complementa con otro postulado: la neutralidad del Estado en materia religiosa es el presupuesto para la pacífica convivencia entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática, al permitir a los ciudadanos actuar con plena inmunidad de coacción en el campo religioso.

d) Por último, el principio de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas obliga al Estado a adoptar una actitud positiva ante las manifestaciones del derecho de libertad religiosa. Esta actitud positiva se enfoca desde una perspectiva asistencial o prestacional. En palabras del Tribunal Constitucional, la Constitución considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas introduciendo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva. Tras proclamar la libertad religiosa y la laicidad del Estado, los poderes públicos no se desentienden del hecho religioso relegándolo a la esfera privada, sino que asumen el compromiso de colaborar con la Iglesia católica y las demás confesiones. Una colaboración que se traduce en la adopción de medidas orientadas a garantizar el reconocimiento real y efectivo del derecho de libertad religiosa.

En desarrollo del artículo 16 de la Constitución, se dictó la ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Esta ley tiene un doble objetivo: concretar el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa y establecer la posición jurídica de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico español.

El artículo 2 de la ley enumera un elenco amplio de manifestaciones del derecho de libertad religiosa. Su párrafo primero se ocupa de las manifestaciones individuales, entre las que incluye las siguientes: a) Derecho a profesar las creencias libremente elegidas o a no profesar ninguna; b) Derecho a cambiar de creencias; c) Derecho a manifestar las creencias profesadas; d) Derecho a no declarar sobre las creencias profesadas; e) Derecho a recibir asistencia religiosa; f) Derecho a conmemorar las festividades religiosas; g) Derecho a celebrar los ritos matrimoniales; h) Derecho a recibir sepultura digna; i) Derecho a elegir para sí, y para los menores bajo su dependencia, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; y j) Derecho a asociarse para desarrollar comunitariamente actividades religiosas. El párrafo segundo del artículo trata de la dimensión

colectiva de la libertad religiosa y reconoce el derecho de las confesiones religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar sus ministros de culto, a divulgar y propagar el propio credo, y a mantener relaciones con las propias organizaciones o con otras confesiones religiosas.

El ejercicio de todas estas manifestaciones del derecho de libertad religiosa, como precisa el propio artículo 16.1 de la Constitución, debe respetar el orden público protegido por la Ley. Orden público que el artículo 3.1 de la ley orgánica de Libertad Religiosa, inspirándose en el artículo 9.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ha concretado en las libertades públicas y derechos fundamentales de los demás ciudadanos y en la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. Estos límites, que deben interpretarse de forma restrictiva, es decir, en el sentido menos lesivo para el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa, han de estar previstos en la ley, responder a un fin legítimo y ser necesarios en una sociedad democrática.

Los artículos 5 y 6 de la ley orgánica de Libertad Religiosa se ocupan de la posición jurídica de las confesiones religiosas. Conforme establece el artículo 5, las confesiones adquirirán personalidad jurídica en el Derecho estatal por medio de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, que es un registro administrativo que depende del Ministerio de Justicia. La inscripción en dicho registro es voluntaria, por lo que su función no es legalizar grupos religiosos, no es un registro de control, sino determinar qué entidades tienen, para el Derecho español, la consideración de confesiones religiosas. La inscripción se practicará en virtud de solicitud de la entidad interesada, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

Por su parte, el artículo 6 de la ley orgánica de Libertad Religiosa otorga plena autonomía a las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, las cuales podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. Este artículo adopta un planteamiento similar al del artículo 4 de la directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, conforme al cual las confesiones religiosas pueden legítimamente exigir

a las personas bajo su dependencia requisitos que, en principio, serían discriminatorios.

El artículo 7 de la ley orgánica de Libertad Religiosa, en desarrollo del mandato constitucional de cooperación con las confesiones religiosas, contempla la posibilidad de que el Estado firme acuerdos de cooperación con los grupos religiosos inscritos en el Registro de Entidades Religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo en España por su ámbito y número de creyentes.

Este precepto supone una novedad parcial en el ordenamiento español, pues el Estado español cuenta con una dilatada tradición concordataria con la Iglesia católica, que se remonta al siglo XVIII. Cuando entra en vigor la ley orgánica de Libertad Religiosa ya se habían firmando con la Santa Sede los acuerdos de 3 de enero de 1979: el acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, el acuerdo sobre Asuntos Económicos y el acuerdo sobre Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos. Con ellos se derogó el Concordato de 1953 y se adaptó el régimen jurídico de la Iglesia católica en España a lo dispuesto en la Constitución de 1978.

En 1992, tras unas largas negociaciones, se firmaron tres acuerdos en aplicación del artículo 7 de la ley de Libertad Religiosa con protestantes, judíos y musulmanes. Estos acuerdos han sido aprobados por las leyes 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, y 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

Los citados acuerdos de cooperación establecen un régimen jurídico particular para las confesiones firmantes en materias como personalidad de las entidades religiosas, lugares de culto, cementerios, ministros de culto, asistencia religiosa, enseñanza, financiación, días festivos o patrimonio cultural. Por medio de estos pactos, se desarrolla el marco constitucional y se da respuesta a las singularidades propias de cada confesión religiosa.

Estos acuerdos (los firmados con la Iglesia católica tienen naturaleza de tratados internacional, mientras que los suscritos con las minorías religiosas son leyes parlamentarias) se aplican en todo el territorio nacional, aunque para su aplicación y desarrollo hay que tener en cuenta las competencias propias de cada comunidad autónoma, así como las correspondientes a los entes locales.

4. La regulación jurídica del factor social-religioso en Andalucía

Es necesario partir, en primer lugar, de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la cual, en clara correspondencia con lo establecido en la Constitución española, establece en su artículo 9:

1. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, en particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea. 2. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio.

Asimismo, el artículo 14 prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en esta ley, particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No obstante, la prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.

En lo relativo al derecho a la educación, el artículo 21 garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A continuación, este precepto afirma que la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Asimismo, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza.

1. Asociaciones y fundaciones. El artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial

y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, por lo que le corresponde desarrollar los aspectos de organización y funcionamiento de las asociaciones. La ley 4/2006, de 23 de junio, de asociaciones de Andalucía, pretende conjugar el ejercicio individual del derecho de asociación, como derecho de la ciudadanía en el ámbito de la vida social a asociarse y a crear asociaciones, y la configuración normativa de mecanismos de fortalecimiento de la estructura y capacidad de actuación de las asociaciones como instrumento eficaz para la vertebración y participación civil.

Esta ley recoge en su artículo 36 la posibilidad de que las asociaciones puedan ser declaradas de interés público de Andalucía, siempre que en las mismas concurren, entre otros, los siguientes requisitos: a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general de Andalucía. Constituyen fines de interés general, a los efectos de esta ley, los de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, promoción de la juventud, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios de uno y otro sexo, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

Respecto a las fundaciones, la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía, aprobó la ley 10/2005, de 31 de mayo, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de regular de manera integral las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía. Para que una fundación quede sometida al ámbito de aplicación de esta ley deberá perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado y de respaldo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o cualesquiera otros de análoga naturaleza, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y estatutarios y de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica y desarrollo tecnológico, o de establecimiento de vínculos de solidaridad entre las personas y los territorios.

2. *Servicios sociales y familias*. La ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía nace ante la necesidad de establecer un sistema que regule, organice, planifique y haga más eficaces los servicios sociales, evitando así la dispersión legislativa existente, la multiplicidad de órganos gestores y su distinto carácter, la diversidad de su régimen de financiación e, incluso, la propia imprecisión legal de los términos usados en materia de servicios sociales.

Por lo que al factor religioso se refiere, su disposición adicional quinta establece que las instituciones que presten servicios sociales de la Iglesia católica o dependientes de ella, así como las vinculadas a otras confesiones religiosas, la Cruz Roja y demás entidades de carácter privado que colaboren con el Sistema Público de Servicios Sociales, conservarán su identidad específica y regirán su organización, y funcionamiento por sus propios estatutos, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el artículo 25 de la ley¹⁵.

Mediante el decreto 103/1989, de 16 de mayo, se crean los consejos andaluz, provinciales y locales de servicios sociales. El artículo 3, relativo a la composición de los consejos de servicios sociales y funcionamiento, establece que el pleno del Consejo Andaluz de Servicios Sociales estará integrado por los siguientes miembros:

c) 36 vocales en representación de: [...] 7. Por la Asamblea Andaluza de la Cruz Roja: Delegación Territorial de Andalucía de la ONCE y por las instituciones de Servicios Sociales de la Iglesia Católica en Andalucía: un representante de cada una de ellas, elegidos por las mismas.

Por su parte, la ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores de Andalucía, establece en su artículo 2 que tienen derecho a las prestaciones y servicios previstos en la mencionada ley las personas mayores de sesenta y cinco años que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Quienes tengan la consideración de andaluces, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. b) Extranjeros, apátridas, o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalucía, en los términos establecidos en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reciprocidad. c) Aquellas otras personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.

El artículo 3 indica los criterios por los que deben regirse las actuaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía en cumplimiento de esta ley, entre el que se señala: «a) Garantizar que las personas mayores gocen de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sin que sufran discriminación alguna por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social».

En el ámbito de los servicios sociales, es de destacar que los obispos de las diócesis que comprenden el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han manifestado su voluntad de seguir colaborando con la Junta de Andalucía para la consecución de una adecuada planificación de los recursos disponibles, al objeto de eliminar los desequilibrios territoriales y procurar la mayor satisfacción de las necesidades, así como la promoción humana de los sectores más desfavorecidos. Surge así el convenio de colaboración entre la Conserjería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y los obispos de las diócesis que comprenden el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de servicios sociales, aprobado mediante la resolución de 18 de abril de 1994. La Junta de Andalucía reconoce en el ámbito de esta comunidad autónoma, el derecho de la Iglesia católica a prestar servicios sociales a través de sus instituciones y entidades propias o dependientes de ellas que se regirán por sus normas estatutarias, de acuerdo con las condiciones generales establecidas en el ordenamiento jurídico. Las instituciones y entidades de la Iglesia católica dedicadas a la gestión de los servicios sociales en Andalucía tendrán los mismos derechos y beneficios que la normativa en vigor reconozca a las entidades privadas sin ánimo de lucro de la iniciativa social.

La ley 7/2001, de 12 de julio, de voluntariado de Andalucía pretende, fundamentalmente, promover la libertad de los ciudadanos a expresar su compromiso voluntario a través de los cauces y organizaciones que mejor satisfagan sus intereses y motivaciones. Asimismo, obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan la participación a través de la acción voluntaria organizada y a disponer los medios y recursos para posibilitar el ejercicio efectivo de la acción voluntaria y su promoción en la sociedad civil, evitando establecer trabas que coarten el desarrollo de su autonomía y capacidad de iniciativa.

El artículo 5 establece en qué áreas de actuación se podrá desarrollar la acción voluntaria: servicios sociales y sanitarios; defensa de los derechos humanos, superación de la exclusión social, superación de la discriminación social por discapacidad, la desigualdad por motivo de género, el racismo, la xenofobia, y la homofobia, áreas de necesidad social; la protección, información y formación de los consumidores y usuarios; orientación sexual; medio ambiente; consumo; educación, ciencia, cultura, deporte, ocio y tiempo libre; patrimonio histórico; emergencias y protección civil; integración de la población inmigrante; cooperación, solidaridad internacional y educación por la paz, y cualquier otra área de necesidad o interés general de naturaleza y fines análogos a las actuaciones voluntarias enumeradas anteriormente y que se ajusten a lo dispuesto en esta ley.

La ley 14/2003, de 22 de diciembre, de cooperación internacional para el desarrollo de Andalucía, tiene como objetivo último ayudar a la erradicación de la pobreza humana mediante la promoción de un desarrollo socioeconómico y sociocultural sostenible. Con tal finalidad, la ley parte del individuo como protagonista y destinatario último de la cooperación y se fundamenta en el

15. La redacción del artículo 25 de la ley 2/1988, de 4 de abril, ha sido modificada en virtud del artículo 28 de la ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas. La nueva redacción es la siguiente:

Se modifica el artículo 25 de la Ley [Comunidad Autónoma de Andalucía] 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 25. Colaboración de la iniciativa social. La iniciativa social, a través de las entidades privadas, podrá colaborar en el

Sistema Público de Servicios Sociales regulado por la presente Ley siempre que observe el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Inscripción previa en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales en Andalucía, que habrá de desarrollarse reglamentariamente.

b) Cumplimiento de las normas de adecuación a los programas establecidos por la Administración, de conformidad con lo preceptuado en la presente Ley.

principio de igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza, cultura o religión. Se crea así, mediante la ley 2/2006, de 16 de mayo, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por último, en este ámbito de los servicios sociales y la familia, cabe mencionar la ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta ley surge de la experiencia práctica acumulada durante estos últimos años, con una concepción amplia de la mediación familiar, entendiendo que ésta no es sólo un instrumento para gestionar y solucionar los conflictos derivados de situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio. Existen otras situaciones que generan también conflicto en el seno de la estructura familiar y a las que se puede dar respuesta a través de la mediación familiar, constituyéndose en una pieza clave para potenciar el bienestar del grupo familiar. El artículo 31, apartado b, tipifica como infracción muy grave toda actuación que suponga una discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las partes sometidas a mediación.

3. Enseñanza y educación. En el ámbito de la educación infantil y primaria destacamos el decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía; y el decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía.

Los decretos mencionados dedican una de sus disposiciones a la enseñanza de la religión —disposición adicional primera, para el caso de la educación primaria, y disposición adicional segunda, para el caso de la educación infantil—, en los siguientes términos:

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la educación primaria de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 2. La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres o tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión. 3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que el alumnado cuyos padres o tutores no hayan optado por que cursen enseñanzas de religión reciba la debida atención educativa, a fin de que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa. Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas en su proyecto educativo para que padres, madres y tutores las conozcan con anterioridad. 4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. 5. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras áreas de la educación primaria. La

evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado español. 6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos. 7. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado que imparta las enseñanzas de religión respetará los principios recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en las normas que lo desarrollen.

En educación secundaria obligatoria son también numerosas las normas que contemplan el factor religioso. Así, por medio de la orden de 21 de febrero de 2000, se regula la optatividad en la etapa de educación secundaria obligatoria, contemplando en su anexo I una relación de asignaturas optativas, entre las que se encuentra «Patrimonio cultural de Andalucía», dedicando algunos temas a «Creencias, ritos y fiestas».

Por su parte, el decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, contempla la enseñanza de la religión, garantizando que, al inicio del curso, los alumnos y alumnas mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos y alumnas menores de edad, puedan manifestar su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión. Asimismo, los centros docentes dispondrán las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa en el caso de que no se haya optado por cursar enseñanzas de religión, garantizando, en todo caso, que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa. Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas en su proyecto educativo para que padres, madres, tutores y alumnado las conozcan con anterioridad. Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas de religión católica, las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado tenga suscritos acuerdos internacionales o de cooperación en materia educativa, en los términos recogidos en los mismos, o la enseñanza de historia y cultura de las religiones. La evaluación de las enseñanzas de la religión católica y de historia y cultura de las religiones se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias de la etapa. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado haya suscrito acuerdos de cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. La determinación del currículo de historia y cultura de las religiones, cuyo

desarrollo corresponde a la consejería competente en materia de educación, se registrará por lo dispuesto para el resto de las materias de la etapa en este decreto. Asimismo, y con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión del alumnado, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes. Por último, el ejercicio de la docencia por parte del profesorado que imparta las enseñanzas de religión respetará los principios recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en las normas que lo desarrollen.

En la etapa de bachillerato y formación profesional, la asignatura de religión, de oferta obligada para los centros y de carácter voluntario para los estudiantes¹⁶, deberá atender los criterios establecidos en el decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, así como a la orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por último, la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía, que tiene por objeto la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo, en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases establecidas para el sistema educativo español, dedica su disposición adicional cuarta al profesorado de religión en los siguientes términos:

1. Según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado que imparta la enseñanza de las religiones deberá cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes confesiones religiosas. 2. El profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de la función pública docente, imparta la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo hará en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con la Administración de la Junta de Andalucía. La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores y profesoras percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo al profesorado interino. En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del contrato, a tiempo completo o a tiempo parcial, según lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a la Administración educativa. La remoción, en su caso, se ajustará a derecho. 3. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado a que se refiere la presente disposición adicional respetará los principios recogidos en esta Ley [...].

4. *Sanidad y alimentación.* La ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, encomienda a la administración sanitaria de la Junta de Andalucía, en su artículo 19.8, el establecimiento de criterios generales, normas y directrices para el ejercicio de la policía sanitaria mortuoria. Con arreglo a estas pautas y estipulaciones legales, los municipios ejercerán las competencias sanitarias que les atribuye el artículo 38.1.e de la citada ley, relativas al control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

Una de las manifestaciones del derecho de libertad religiosa es el derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos. Desde esta perspectiva, el decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de policía sanitaria mortuoria, contempla los supuestos especiales de conducción de cadáveres estableciendo que en casos extraordinarios, la conducción de cadáveres en el ámbito de un término municipal podrá realizarse, previa conformidad del Ayuntamiento, según los ritos religiosos del fallecido (artículo 16). Por su parte, el artículo 42 contempla la posibilidad de enterramiento en lugares distintos a los establecidos en la ley: «La Dirección General de Salud Pública y Participación, previo informe del Delegado Provincial de la Consejería de Salud, podrá aprobar el proyecto y autorizar la construcción de panteones especiales, tales como criptas y bóvedas, en Iglesias y recintos distintos de los cementerios».

En el ámbito de la alimentación destaca la orden de 27 de marzo de 2003, por la que se regula la organización, funcionamiento y gestión del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

El artículo 16 se dedica a los menús y dieta equilibrada en los comedores escolares. En este aspecto, el apartado 3 del mencionado artículo, señala que:

la Dirección del centro programará los menús de 4 a 6 semanas de acuerdo con criterios de alimentación sana y equilibrada del alumnado. Este menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio, sea alumnado o personal del centro. No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos, creencias religiosas u otras circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial.

Por su parte, la orden de 6 de julio de 2009, por la que se aprueba el reglamento de régimen interno de los centros que componen el servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo que las acompañen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dedica su artículo 15 a la cuestión relativa a la alimentación en los centros, garantizando a las personas usuarias que lo precisen, por prescripción médica o por motivos culturales-religiosos, un menú de régimen adecuado a sus necesidades.

16. Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se regulan las enseñanzas de bachillerato en Andalucía.

5. *Menores.* La ley 1/1998, de 20 de abril, del menor de Andalucía, establece el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los derechos de los menores, así como en relación con la ejecución de las medidas que sobre los mismos sean acordadas por los juzgados competentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo que disponga la legislación estatal. El artículo 10, relativo a la atención sanitaria a los menores, establece en su apartado 9 que éstos «tendrán derecho a recibir los cuidados que necesiten en el máximo respeto a las creencias éticas, religiosas y culturales del menor y sus progenitores, siempre y cuando éstas no pongan en peligro la vida del menor o la salud pública, en cuyo caso se atenderán a lo dispuesto por la autoridad y la legislación vigente».

En los mismos términos se expresa el decreto 42/2002, de 12 de febrero, por el que se aprueba el régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, cuyo artículo 10, enmarcado en el título relativo a los derechos de los menores sujetos a medidas de protección, dispone en su párrafo 1 que «los menores sujetos a medidas de protección y sus familias tienen derecho a ser tratados de modo respetuoso para con su intimidad, etnia, valores religiosos y culturales, orientación sexual y diversidad familiar». Por su parte, el decreto 355/2003, de 16 de diciembre, sobre acogimiento residencial de menores, pone énfasis en la protección de una información adecuada hacia los menores, a fin de ejercitar legítimamente, entre otros derechos, el conocer su propia historia personal y familiar y a que sean respetados sus antecedentes y valores culturales, religiosos y étnicos (artículo 9.c). Por último, el decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad, establece la obligación de los profesionales sanitarios y no sanitarios a respetar la libertad del menor y la de su familia, de profesar cualquier religión o creencia, así como sus valores éticos y culturales, siempre que no pongan en peligro la vida de la persona menor de edad o la salud pública, en cuyo caso se atenderán a lo dispuesto por la legislación vigente (artículo 3.c).

6. *Otra normativa.* El Servicio Andaluz de Empleo, creado por la ley 4/2002, de 16 de diciembre, es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la consejería competente en materia de empleo, y actúa como órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía. En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, la actuación del Servicio Andaluz de Empleo debe ajustarse a una serie de principios, entre el que se encuentra, el de «igualdad de oportunidades, garantizando la no discriminación por razón de sexo, raza, edad, estado civil, lengua, religión, origen, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (artículo 2.a).

La ley 12/1999, de 15 de diciembre, de turismo de Andalucía, establece que el acceso a los establecimientos turísticos no podrá ser restringido por razones de discapacidad, raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión u otra cualquier circunstancia personal o social (artículo 23.2).

El decreto 251/2005, de 22 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de Interés Turístico de Andalucía, enumera en su artículo 4 los requisitos para adquirir tal declaración, estableciendo entre los mismos las fiestas que posean valor cultural en torno a manifestaciones de interés artístico, religioso, gastronómico, deportivo o de cualquier otro tipo¹⁷. De esta manera, la orden de 17 de julio de 2006, declara fiestas de interés turístico a la Semana Santa de Andalucía, pues la misma representa un fenómeno cultural, con características comunes y unitarias que la singularizan respecto de otras fiestas y como importante elemento dinamizador de la actividad turística.

5. Conclusiones

Para dar una adecuada respuesta a las demandas que el pluralismo religioso plantea hoy día, los gestores públicos deben tener presente que el modelo constitucional de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas está basado en los principios de libertad religiosa, no discriminación, laicidad y cooperación.

El derecho fundamental de libertad religiosa, en cuanto derecho subjetivo, tiene una doble dimensión: interna, que faculta a la persona para elegir libremente unas determinadas creencias o no elegir ninguna (un claustro íntimo de creencias que debe ser respetado en todo caso), y externa, que comprende el derecho de la persona a manifestar sus creencias, en público y en privado, de forma individual y colectiva, y a actuar de acuerdo con ellas.

Los poderes públicos no sólo deben respetar las opciones de los ciudadanos en materia religiosa, sino que deben adoptar medidas para garantizar un pleno, real y efectivo reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa. Esto exige el establecimiento de relaciones de cooperación con los grupos religiosos para lo cual resulta indispensable delimitar exactamente las competencias propias de las distintas administraciones (estatal, autonómica y local), conocer la composición religiosa de la sociedad y tener presentes los modelos

17. La orden de 13 de julio de 2007 regula el procedimiento para resolver las declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.

de gestión utilizados para articular una respuesta coherente y eficaz al factor social-religioso que contribuya a un desarrollo de las vivencias religiosas en armonía, con pleno respeto entre unas y otras, y a la plena integración social de las minorías.

Estas premisas son particularmente importantes en materias como el establecimiento de lugares de culto, pues para las confesiones religiosas la tenencia de un espacio para la práctica del culto resulta algo consustancial a su propia dignidad como entidad, la enseñanza o las relaciones de especial sujeción con la Administración (centros penitenciarios, centros de menores o centros de internamiento de extranjeros).

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que los poderes públicos deberían tener presentes los siguientes criterios de actuación en la gestión de la diversidad religiosa:

1. A la hora de relacionarse la administración pública con una determinada entidad religiosa, el papel fundamental recae sobre los funcionarios públicos encargados de atenderles. De ahí la conveniencia de una mayor formación de los técnicos de las distintas administraciones en el ámbito religioso. Para ello, se requiere un conocimiento previo de la diversidad religiosa existente en un territorio determinado¹⁸. Bastará con diseñar un curso de formación para el funcionariado, crear un organismo u oficina *ad hoc* o bien externalizar este servicio en técnicos especializados.

2. Asimismo, y en armonía con la propuesta anterior, sería interesante conseguir una mayor sensibilización por parte de las administraciones públicas en referencia a los colectivos confesionales. Algunos gestos de acercamiento de los ediles municipales —como la visita al lugar de culto o la asistencia a una ceremonia importante para la comunidad religiosa— facilitan mucho la normalización de las relaciones administración-entidades religiosas. El hecho religioso puede convertirse en un factor de cohesión social o en un motivo de ruptura y dispersión, dependiendo del enfoque que se le dé, en primer lugar —aunque no de manera exclusiva—, por parte de las administraciones del Estado.

3. En un paso más, se podría incidir en una serie de cuestiones que mejorarían sensiblemente las relaciones entre las administraciones públicas y las confesiones religiosas. Así, por ejemplo: a) Dar respuesta, aunque sea negativa, y con su respectiva motivación, a toda solicitud que provenga de una entidad religiosa; b) Evitar que se ralenticen los procesos administrativos y burocráticos —ya de por sí lentos y tediosos— por la simple razón de provenir de colectivos religiosos; c) Hacer partícipes a las confesiones religiosas de los problemas con los que se encuentran las administraciones públicas a la hora de gestionar la diversidad religiosa. Así se conseguirá no sólo que el poder público realice un mayor esfuerzo de sensibilización, sino que las confesiones

conozcan de primera mano los límites en los que se pueden mover tanto los ayuntamientos como los entes autonómicos; d) Implementar foros de diálogo entre los representantes religiosos y los poderes públicos, a nivel local y autonómico.

4. Toda iniciativa encaminada a clarificar conceptos jurídicos indeterminados como «ministro de culto», «lugar de culto» o «notorio arraigo» podría solucionar bastantes problemas. Hasta ahora, estas cuestiones se dejan en manos de las confesiones o a la discrecionalidad de la administración pública, sin unos requisitos legales mínimos.

5. Laicidad y aconfesionalidad del Estado no se pueden equiparar con impedir a todas las confesiones religiosas —tanto la «mayoritaria» como las «minoritarias»— el ejercicio colectivo de sus derechos y libertades. A veces se piensa que negando sistemáticamente las pretensiones y solicitudes de cualquier agente religioso se está salvaguardando la correcta aplicación de estos principios. Y no es verdad, porque la norma fundamental también establece que el Estado cooperará con las confesiones religiosas, sin convertirse por ello en un «Estado religioso o confesional» (artículo 16.3 CE)¹⁹.

6. Llevar a cabo programas de sensibilización social de manera conjunta entre los poderes públicos y las confesiones religiosas, poniendo un mayor énfasis en los aspectos positivos de las comunidades e iglesias, sin olvidar las valiosas aportaciones que realizan a la sociedad, podría contribuir a un cambio de percepción por parte de los ciudadanos en lo referente a la diversidad religiosa. Y es que, al final, todo depende de la «buena voluntad» de los responsables de la administración, de los miembros de las confesiones religiosas, así como de la ciudadanía en general.

18. Es imprescindible conocer cómo funcionan y a través de qué normas fundamentales o costumbres se rigen las distintas comunidades —por ejemplo, no tendrá problemas un evangélico en relación con la comida, pero sí un judío o un musulmán—, cuál es su estructura, quiénes son los interlocutores válidos, qué características específicas requieren sus lugares de culto, etc.

19. En lugar de otorgar un «no» a las reivindicaciones de todas las confesiones, sería más adecuado colaborar con todas, cuando se trate de intereses legítimos, modulando las concesiones y ayudas en función de parámetros objetivos, tales como el grado

de implantación en el territorio (número de miembros, lugares de culto, antigüedad e historia, etc.), repercusión de sus obras sociales y ramas asistenciales, iniciativas realizadas para una mejor convivencia, colaboración en programas públicos, etc.

6. Bibliografía

AA.VV. (2008)

Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España, Ministerio de Justicia, Madrid, 2008.

AA.VV. (2010)

Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, volumen XXVI, Cuenca, 2010.
Actas del congreso Libertad religiosa y libertad de culto en España: de la Constitución a las competencias autonómicas y locales, Oviedo, 1-2 de febrero de 2010.

ÁLVAREZ CORTINA, A.C. Y RODRÍGUEZ BLANCO, M. (coords.) (2006)

La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, Comares, Granada, 2006.

- (2008)

Aspectos del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas, Comares, Granada, 2008.

BARRERO ORTEGA, A. Y TEROL BECERRA, M. (coords.) (2009)

La libertad religiosa en el Estado social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

BLANCO, M. (2008)

Libertad religiosa, laicidad y cooperación en el derecho eclesiástico. Perspectiva actual del derecho pacticio español, Comares, Granada, 2008.

BRIONES GÓMEZ, R. (coord.) (2010)

¿Y tú de quién eres? Minorías religiosas en Andalucía, Icaria, Madrid, 2010.

FERRER ORTIZ, J. (coord.) (2007)

Derecho eclesiástico del Estado español, 6ª edición, EUNSA, Pamplona, 2007.

GONZÁLEZ DEL VALLE, J.Mª. (2006)

Derecho eclesiástico español, sexta edición, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2006.

IBÁN, I.C., PRIETO SANCHÍS, L. Y MOTILLA, A. (2004)

Manual de Derecho eclesiástico, Editorial Trotta, Madrid, 2004.

JORDÁN VILLACAMPA, Mª.L. (dir.) (2003)

Multiculturalismo y movimientos migratorios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

LEMA TOMÉ, M. (2007)

Laicidad e integración de los inmigrantes, Marcial Pons, Madrid, 2007.

MARTÍN SÁNCHEZ, I. Y GONZÁLEZ, M. (coords.) (2009)

Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2009.

MINTEGUA ARREGUI, I. (ed.) (2009)

Derechos humanos en la ciudad, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009.

MOTILLA, A. (ed.) (2004)

Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural, Editorial Trotta, Madrid, 2004.

NAVARRO-VALLS, R., MANTECÓN SANCHO, J. Y MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (coords.) (2009)

La libertad religiosa y su regulación legal, Iustel, Madrid, 2009.

OLLERO, A. (2009)

Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009.

PÉREZ-MADRID, F. (2003)

Inmigración y libertad religiosa, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003.

PONCE SOLÉ, J. (coord.) (2010)

Ciudadanos, Derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2010.

RODRÍGUEZ BLANCO, M. (2008)

La libertad religiosa en centros penitenciarios, Ministerio del Interior-Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Madrid 2008.

RODRÍGUEZ MOYA, A. Y SOUTO GALVÁN, E. (coords.) (2009)

Inmigración y resolución de conflictos: la mediación intercultural, Dykinson, Madrid, 2009.

SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, A. (2005)

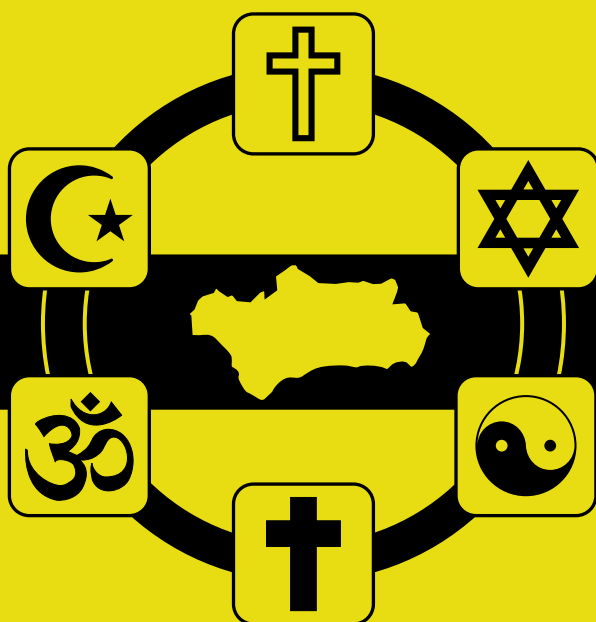
Libertad religiosa y Estado autonómico, Comares, Granada, 2005.

... 50 51 52 53 54 **55**

NÚMEROS PUBLICADOS

- 01: Aportaciones para entender el efecto de la inmigración en Andalucía
- 02: Cómo entender el debate de la Financiación Autonómica
- 03: La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: contexto e inicio
- 04: Valores democráticos de la II República
- 05: El gasto y el endeudamiento en las familias españolas
- 06: ¿Es viable el copago en el sistema de financiación sanitaria?
- 07: La brecha digital de Andalucía
- 08: Dependencia en personas mayores en Andalucía
- 09: La política en Andalucía desde una perspectiva de género
- 10: Propuestas para el uso racional del agua en Andalucía
- 11: La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: la pro posición parlamentaria
- 12: La evolución del bienestar en Andalucía
- 13: Los andaluces y la Unión Europea
- 14: Aproximación a la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía
- 15: Economía política de los gobiernos locales. Una valoración del funcionamiento de los municipios
- 16: Entrada a la maternidad: efecto de los salarios y la renta sobre la fecundidad
- 17: Elecciones municipales andaluzas de 27 de mayo de 2007: conti nuidades y cambios
- 18: La ciudadanía andaluza hoy
- 19: Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
- 20: Preocupaciones sociales sobre la infancia y la adolescencia
- 21: La inversión en formación de los andaluces
- 22: Poder Judicial y reformas estatutarias
- 23: Balance de la desigualdad de género en España. Un sistema de indicadores sociales
- 24: Nuevas Tecnologías y Crecimiento Económico en Andalucía, 1995-2004
- 25: Liderazgo político en Andalucía. Percepción ciudadana y social de los líderes autonómicos
- 26: Conciliación: un reto para los hogares andaluces
- 27: Elecciones 2008 en Andalucía: concentración y continuidad
- 28: La medición del efecto de las externalidades del capital humano en España y Andalucía. 1980-2000
- 29: Protección legislativa del litoral andaluz frente a las especies invasoras: el caso Doñana
- 30: El valor monetario de la salud: estimaciones empíricas
- 31: La educación postobligatoria en España y Andalucía
- 32: La pobreza dual en Andalucía y España
- 33: Jubilación y búsqueda de empleo a edades avanzadas
- 34: El carácter social de la política de vivienda en Andalucía. Aspectos jurídicos
- 35: El camino del éxito: jóvenes en ocupaciones de prestigio
- 36: Mutantes de la narrativa andaluza
- 37: Gobernanza multinivel en Europa. Una aproximación desde el caso andaluz
- 38: Partidos políticos, niveles de gobierno y crecimiento económico regional
- 39: Bilingüismo y Educación. Incidencia de la Red de Centros Bilingües de Andalucía
- 40: Marroquíes en Andalucía. Dinámicas migratorias y condiciones de vida
- 41: Obstáculos y oportunidades. Análisis de la movilidad social intergeneracional en Andalucía
- 42: El vandalismo como fenómeno emergente en las grandes ciudades andaluzas
- 43: Transformando la gestión de recursos humanos en las administraciones públicas
- 44: Valores y conductas medioambientales en España
- 45: ¿Sabemos elegir? Introducción al estudio de la conducta económica de las personas
- 46: Metro ligero e innovación para la movilidad sostenible de las áreas metropolitanas andaluzas
- 47: El papel de las regiones en la actual Unión Europea
- 48: Nuevos enfoques en el diseño de los copagos farmacéuticos
- 49: La inmigración en Andalucía. Un análisis con datos de la Seguridad Social (2007-2008)
- 50: Arte contemporáneo y sociedad en Andalucía
- 51: La creación de una nueva realidad empresarial. El caso de Andalucía
- 52: Nuevos modelos de familia en Andalucía y políticas públicas
- 53: Rasgos básicos del envejecimiento demográfico y las personas mayores en Andalucía
- 54: Género, salud y orden social. El caso del modelo clínico de transexualidad

IDAD



El golpe. Cultura del entorno